

Movimientos urbanos y cambio político

Jordi Borja

Primera parte: movimientos urbanos y cambio social

I. Introducción

Los movimientos emergentes tienen una apariencia revolucionaria y una relativa ineficacia política que despiertan inevitablemente las simpatías de los espectadores.¹ La apariencia revolucionaria es mantenida tanto por los *objetivos* (se plantea como objetivos inmediatos las aspiraciones generales, expresadas en términos ideológicos, de cambio total; por ejemplo, la vivienda como servicio social igual para todos) como por la *forma de acción* (importancia de la acción directa, como las ocupaciones, la “desobediencia civil”, la denuncia radical del gobierno a través de medios de comunicación o de asambleas, y en cambio escasa capacidad de negociación).

¹ Los medios de comunicación de masas y sectores como el académico, intelectual y profesional simpatizan con movimientos que responden a una situación reconocida universalmente como injusta (familias sin vivienda, niños sin escuela, barrios sin agua o sin transporte, etcétera), esta situación plantea a la vez alternativas radicales pero genéricas (lo que no representa casi nunca un problema político importante) y demandas de asistencia concreta (que en mayor o menor medida pueden ser satisfechas) que por su carácter discontinuo y no institucional no establecen de momento una situación política nueva que obligue a comprometerse y en cambio hacen posible expresiones “legítimas” y esporádicas de solidaridad y de denuncia. No pretendo reducir la generalidad de los movimientos urbanos y el consenso social que encuentran a una función catártica de la colectividad y a dar ocasiones a los profesionales e intelectuales de darse buena conciencia o a teorizar la revolución a “peu de frais”. Después abordaré las causas objetivas de esta generalidad creciente de los movimientos urbanos. Pero es útil tener en cuenta también esta dimensión atractiva precisamente para los “especialistas” o “divulgadores” de la temática porque introduce elementos importantes de distorsión. En torno a la temática de los movimientos urbanos se da una curiosa confusión y a veces una alianza entre diri-

¿Por qué digo “apariencia revolucionaria”? No se trata de una crítica a estos movimientos, sino de una constatación de su carácter primitivo. El carácter radical de los objetivos expresa una protesta pero no un planteamiento viable. Cuanto más genéricos son los objetivos, cuantas más referencias se hacen a un cambio global, menos se inscribe el movimiento en una lógica de transformaciones concretas. Las formas de acción directa, los términos, los enfrentamientos puntuales, la ilegalidad, no son la consecuencia de un movimiento avanzado, que ha superado el marco de las instituciones del Estado existentes y que está promoviendo un cambio revolucionario. Los movimientos urbanos no están institucionalizados porque son jóvenes y relativamente débiles, porque aún no han creado formas de organización y representación sólidas, porque aún no se han especificado interlocutores válidos, porque no han conseguido los cambios institucionales mínimos para ser reconocidos por el Estado. Su ilegalidad no forma parte de una situación de “doble poder” sino de no haber sido aún reconocidos por el poder.

Por eso me refería a su “relativa ineficacia política”. La ineficacia resulta del carácter minoritario, puntual o discontinuo, ilegal o extrainstitucional que, en general, tienen los movimientos urbanos más radicales en sus objetivos y formas de acción. Este radicalismo es más una consecuencia que una causa de su falta de reconocimiento institucional y por lo tanto de su incapacidad de conseguir de inmediato cambios sustanciales en la distribución del producto social urbano y del poder político local.

La ineficacia política, decíamos, es sin embargo relativa. Lo es por lo que respecta a los objetivos explícitos, ideológicos, de los movimientos. No lo es, en cambio, por lo que respecta a la correlación de las fuerzas políticas y sociales, a los valores ideológicos o culturales, al funcionamiento mismo de las instituciones; al menos cuando se trata de movimientos amplios y constantes. Los movimientos urbanos contribuyen a la organización de algunos sectores sociales, o bien de nuevos frentes de conflictividad social, obligan a un replanteamiento de los mecanismos de control y de apropiación del producto social. A través de los movimientos urbanos se expresa una fuerza colectiva que antes estaba atomizada, se abre una crisis en el sistema político-económico local, y éste, de momento no es capaz de satisfacer, ni siquiera de recibir, las demandas sociales. Se actualizan valores que antes sólo se reconocían en abstracto (por ejemplo el

gentes de administraciones conservadoras, académicos y mandarines universitarios, teóricos radicales y activistas sociales políticamente desarraigados. Todos coinciden en la teorización “revolucionaria” de tipo social y cultural de estos movimientos que exigen una “nueva política” y coinciden en la crítica exasperada de la izquierda real existente en el Estado (socialista y comunista en general), acusada de reformismo, de no ver los nuevos fenómenos, de economicismo, etcétera. Estas críticas que pueden contener elementos válidos, se desautorizan por la ineficacia política de los planteamientos técnicos y por la falta de proyección práctica de estos sectores. No queremos señalar a nadie en particular pero “quien avisa no es traidor”.

derecho a la vivienda o a la escuela), e incluso se reconocen nuevos derechos sociales (sobre la vivienda ante las expropiaciones, sobre los aparatos domésticos ante los programas de obras públicas, sobre el derecho a disponer de centros sociales, sobre la participación y el control ciudadano) o, al menos se legitiman necesidades por cuya satisfacción se lucha. Con todo ello se va a una progresiva transformación de las instituciones, de la legalidad, del peso de las fuerzas sociales y políticas en los órganos de poder, y en consecuencia, también a una modificación de los mecanismos socio-económicos urbanos, el papel del sector público, las apropiaciones de las plusvalías y los márgenes de actuación del capital.

Pero para llegar a estos resultados los movimientos urbanos deben efectuar una larga marcha a través de las instituciones y la vida política, deben dar cohesión a una colectividad social, deben establecer relaciones conflictivas y de negociación pero estables con los órganos del Estado, deben adquirir legitimidad social, es decir influir sobre los valores dominantes y sobre la lucha de clases global, deben conquistar momentos de hegemonía.²

II. *Movimientos urbanos y vida social*

Los movimientos urbanos no pueden reducirse a su dimensión reivindicativa, ni tampoco a su carácter cívico-político (democracia local).

Queremos señalar primero su relación con la *vida social colectiva*. Los movimientos urbanos y ciudadanos y la actividad asociativa que generan o vitalizan son un medio de existencia y desarrollo de la vida colectiva ciudadana. La ciudad capitalista rompió las comunidades tradicionales, rurales o urbanas, y creó grandes concentraciones de población atomizada. El movimiento obrero y socialista, a través de los partidos y sindicatos, pero también merced a cooperativas, centros culturales recreativos y deportivos etcétera ha jugado, desde el siglo pasado, en todos los países industriales un papel importante en la recomposición del tejido social colectivo. El capitalismo monopolista ha acelerado el proceso de centralización y burocratización del Estado y ha desarrollado las formas de consumo individual, de culturas recibidas pasivamente por una masa de espectadores (espectáculos deportivos, juegos de azar, tv). La gran ciudad del capitalismo

² Hay que evitar establecer tipologías demasiado rígidas de los movimientos urbanos en función de las coyunturas políticas. A este respecto la tipología establecida en mi estudio sobre "Movimientos urbanos y estructura urbana" (del libro *Movimientos Sociales Urbanos*, SIAP, 1976) puede inducir a errores dogmáticos si se aplica directamente a realidades concretas. En este artículo planteo la cuestión en términos más fluidos y concretos, relativos sobre todo a las situaciones que se dan en sociedades desarrolladas y afectadas por la crisis y Estados formalmente democráticos con tendencias autoritarias pero con una presencia importante dentro del Estado de las clases populares organizadas.

monopolista es la sede de una sociedad que tiende a la atomización socio-cultural y favorece que los comportamientos de oposición adquieran formas de "desorganización social".

Pero a esta tendencia se le opone la contraria. La población tiende a reconstruir centros de agregación, de vida colectiva, de participación. Se busca el encuentro, la vida social activa, la cooperación. De la misma forma que frente al trabajo "parcelizado" se ha revalorado el oficio y las pequeñas compensaciones del trabajo manual y frente a la vida urbana reducida a los humos, el asfalto y la prisa, se ha sentido la necesidad del espacio verde o de la "vuelta a la naturaleza" de los fines de semana, frente a la atomización social de los consumidores individuales —residentes en bloques— viajantes en su automóvil y perseguidores del estatuto, se va forjando una nueva vida social urbana que revaloriza las calles y las plazas, se defienden los espacios de uso público y se reivindican medios de vida colectiva, se constituyen (o reconstituyen) asociaciones de vecindario y entidades cívicas, se rehacen lazos solidarios y concepciones activas de la cultura. Los movimientos urbanos son también y quizá primero que todo, esta dimensión colectiva de la vida ciudadana. En los Estados autoritarios y/o en las sociedades más individualistas y competitivas, la recomposición del tejido colectivo urbano a través de actividades y asociaciones ha sido seguramente el efecto más profundo de las movilizaciones ciudadanas.

No se trata de idealizar ningún pasado de los barrios tradicionales ni ninguna naturaleza humana que necesite por esencia esta vida colectiva. Es la misma sociedad desarrollada la que a la vez que destruye los lazos colectivos multiplica las relaciones y las posibilidades sociales, la que a la vez que atomiza la vida ciudadana crea condiciones para nuevas agregaciones, en lo cultural, en el consumo, en el esparcimiento, en la vida cotidiana. El nuevo urbanismo y las nuevas concepciones de la vivienda, que revaloran los espacios de uso colectivo y que se plantean la posibilidad de aparatos domésticos comunes (lavadoras automáticas, cocinas y comedores, sala de televisión y de lectura, etcétera), así como la creciente gestión colectiva de las unidades residenciales, son una muestra de una tendencia que está en sus inicios. Ejemplos que van en el mismo sentido son la multiplicación de entidades culturales y recreativas, la resurrección de fiestas y actividades de barrio, la recuperación de distintas formas de cooperación (desde el deporte hasta el consumo), fenómenos que se dan en muchas de las grandes ciudades occidentales.

A menudo el sociólogo o el político preocupado por los fenómenos nuevos o por los conflictos abiertos, no ha percibido esta nueva sociedad, la ha despreciado como simples residuos de la obsoleta vida urbana tradicional y ha dejado así que fuera un pensamiento idealista, el que divulgara la ideología del vecindario urbano, de la comunidad de barrios.

Los movimientos urbanos tienen en su base algo más que las exigencias de vivienda o de aparatos domésticos, es decir de necesidades ligadas a la

reproducción de la fuerza de trabajo, a las “condiciones de vida”, como se dice habitualmente.

No se es más “materialista” por el hecho de tener una visión estrictamente economicista de la realidad social, todo lo contrario. La motivación política, la demanda de participación en el gobierno local, tampoco explica toda la complejidad de las movilizaciones ciudadanas. En ellas como motivación explícita o latente, y en todo caso como efecto, encontramos siempre este aspecto agregador, de recomposición de la vida colectiva.³

III. *Movimientos urbanos y condiciones de vida*

La ciudad, el barrio, el binomio familia-vivienda, constituyen los medios a través de los cuales se percibe en general el salario indirecto, es decir aquel que se recibe o debería recibirse no en forma monetaria en el lugar de trabajo, sino en forma de bienes y servicios público-sociales (vivienda pública o subvencionada, transportes colectivos, infraestructuras urbanas, zonas verdes, escuela, seguridad social, eventos culturales, sanitarios o deportivos, agua, gas y electricidad, etcétera). Estos bienes y servicios se distinguen porque son estrictamente necesarios para reproducir adecuadamente la fuerza de trabajo, y porque su forma de consumo es colectiva (la misma vivienda no solamente es de uso familiar, sino que solamente existe integrada en los servicios del barrio y de la ciudad). Algunos de estos bienes deben pagarse como mercancías, como a veces el agua-gas-electricidad, o, para una parte de la población, la vivienda, la escuela y la asistencia sanitaria, etcétera. Con lo cual dejan de ser percibidos como salario indirecto. Es un signo de atraso social, de gasto público insuficiente y de crecimiento con costes humanos altos.

El salario indirecto está en manos del Estado, bien a través de sus órga-

³ La tradición sociológica anglosajona se ha preocupado especialmente de la vida comunitaria urbana, aunque desde una perspectiva muy descriptiva y/o idealista. Los trabajos más recientes se encuentran citados y resumidos en el libro de S. Keller: *El vecindario urbano* (Siglo XXI, 1975). En Europa la izquierda se ha preocupado poco de la cuestión, interesada en los aspectos directamente políticos y económicos más generales. Excepto por lo que se refiere a las cuestiones relativas a la “animación socio-cultural”. Ver por ejemplo P. Belleville: *Animation, pour quelle vie sociale?* (TEMA - Editions, 1974) y A. Emiliani: *Una politica dei beni culturali* (Eunandi, 1975). En Italia, el PCI responsable de la gestión municipal en las grandes ciudades, sobre todo después de las elecciones de 1975, está recuperando la tradición humanista de la vida ciudadana e incorporándola a su proyecto político de democratización del Estado. Ver por ejemplo D. Novelli, alcalde de Torino: “I valori dell'uomo nelle crisi della città industriale” (Comunicación a la conferencia sobre el habitat, de la ONU, Vancouver, 1976); la intervención de R. Zangheri, alcalde de Bolonia, en el libro colectivo “Sviluppo delle autonomie locale e riforme del Stato”; y los artículos del núm. 23-1975, de *Rinascita*, inmediatamente antes de las elecciones locales sobre el “Destino delle grandi città”.

nos globales (por ej. el ministerio de educación o de obras públicas o los ayuntamientos) o de órganos especializados más o menos autónomos (seguridad social, instituto de la vivienda, etcétera...). El Estado debe asegurar las condiciones generales de reproducción de la fuerza de trabajo puesto que es el gestor de los aspectos globales de la vida socioeconómica.

En el capitalismo desarrollado el proceso de concentración económico-territorial ligado a la mayor complejidad en la división del trabajo y al aumento y diversificación de las necesidades sociales, ha dado lugar a que el consumo colectivo y por lo tanto el salario indirecto tiendan a crecer rápidamente. En los países del Mercado Común Europeo el salario indirecto puede representar entre el 30 y el 40% de los ingresos reales de la población. Pero el desarrollo monopolista y las necesidades colectivas son cada vez más contradictorios, estas contradicciones repercuten en el interior del Estado y crean múltiples conflictos sociales. El Estado aparece entonces a la vez como un instrumento del capital monopolista y como un receptor de las demandas sociales.⁴

Se pueden dar varios tipos de situaciones conflictivas. Muy esquemáticamente señalaré tres tipos, sin pretender con ello agotar la casuística.

1 Movimientos urbanos y población "marginal"

El caso característico de las sociedades poco desarrolladas o fuertemente desequilibradas es el de grandes masas de población urbana viviendo en condiciones consideradas —por las instituciones, la ideología dominante, la "opinión pública"— por debajo del mínimo humano y aceptable. La expresión de estos casos es el chabolismo o "villas miseria", la población infantil desescolarizada, los barrios centrales superdegradados o los periféricos "ilegales" y sin servicios de ninguna clase, etcétera... En la medida que la población es relativamente marginal, económica y urbanísticamente, que el ritmo de desarrollo es bajo o sin capacidad integradora respecto a esta población, que las necesidades socialmente viables aumentan poco, la movilización urbana se limita a explosiones o rebeliones puntuales, producto de la exasperación o como respuesta defensiva a una intervención exterior que pueda empeorar la situación (por ejemplo un programa de actuación en la zona que se traduce en expropiaciones). Este tipo de situación no da lugar, en general, a un movimiento continuado con efectos políticos profundos (excepto en situaciones de crisis política: Chile, Por-

⁴ Véase: M. Castells: *Intervention de l'Etat, consommation collective et contradictions urbaines* (P.U.F., 1976, libro colectivo sobre "La crise de l'Etat", dirigido por N. Poulantzas). E. Preteceille: *Equipements collectifs, structures urbaines et consommation sociale* (C.S.U., 1975).

J. Lojkine: *L'Etat et l'urbain*. Thèse de doctorat. Paris, 1976.

La pensée núm. 180: Les besoins.

J. O'Connors: *The fiscal crisis of the State* (St. Martin's Press 1973).

G. Sarpellon: *Dalla crisi alle crisi* (Feltrinelli, 1975).

tugal),⁵ pero sí a experiencias de pseudo solución de los problemas y necesidades más elementales.

2 Movimientos urbanos y desarrollo económico-social

Un segundo caso sería el correspondiente a los modelos de desarrollo con altos costes sociales. Este caso lo encontramos, de forma más o menos acentuada en casi todos los países capitalistas, pero sobre todo en aquellos en los que el crecimiento se da en condiciones de grandes desequilibrios económico-sociales y territoriales y en los que existe una oferta importante de mano de obra barata (Italia, España). En estas situaciones se da un proceso que podría dividirse de forma simplista en tres fases.

Primero se produce un crecimiento concentrado en ciertas áreas urbanas, con grandes inmigraciones de mano de obra y una falta total de inversiones sociales (públicas o privadas) con los consiguientes fenómenos de déficit enormes, saturación del tejido urbano, crecimiento periférico caótico, etcétera.

Luego, la ineludible exigencia de ordenar el funcionamiento urbano, la existencia de demandas relativamente coherentes y la utilización especulativa del espacio, la obligación del Estado de responder a las necesidades sociales básicas (vivienda, escuela, transportes, hospitales), con los mínimos costes da lugar a una política urbana de control de las áreas centrales (pero creando ocasiones especulativas) y de creación —por iniciativa pública o privada— de unidades periféricas, “polígonos”, “grandes conjuntos” o “ciudades satélites”, que, a un precio casi siempre bastante alto, den una apariencia de alojamiento urbano, falta de servicios y de los medios de vida social más necesarios.

⁵ Sobre la incidencia de los movimientos urbanos en la coyuntura política chilena la bibliografía es muy extensa. Ver por ejemplo la revista *Eure*, en especial el núm. 7 (1973); “Pan, techo y poder”, de E. Pastrana y M. Thelfall (SIAP, 1974); la selección de trabajos del CIDY (Ariel, 1976) (preparada por J. Rojas y Franz Vandeshuren). En general estos textos adolecen de una visión excesivamente simplista del carácter “revolucionario” de estos movimientos. Esta deformación también se encuentra en nuestro texto “Movimientos urbanos en situaciones de dualidad de poder” (del libro *Movimientos sociales urbanos*, antes citada). Sobre los movimientos urbanos en Chile (1970-1973) puede ser un estudio definitivo la tesis doctoral de J. Rojas que debe ser presentada próximamente en París (E.R.M.E.). Sobre distintos casos latinoamericanos puede consultarse “Estructura de clases y política urbana en América Latina” (M. Castells y otros, SIAP, 1974). Ver también el seminario de (LACSO, CENDES-ILDIS y Universidad de los Andes: Movimientos urbanos y transformaciones de la estructura espacial (Caracas, 1975).

Sobre Portugal, las publicaciones *Cittá-clase* núm. 4 (1975) y *CAU* núm. 32 (1975) Barcelona, resumen los conflictos respecto a la vivienda del primer año. Un artículo más reciente es el de R. Boix y J. Borja “Los movimientos urbanos en Portugal” (*JANO-Arquitectura*, Barcelona, julio 1976). Ver también la entrevista de Nuno Portas en *Espaces et Société* (1975) y los trabajos del taller de urbanismo que dirigen N. Portas y L. J. Bruno Soares, en la Universidad de Lisboa.

La tercera fase, la conflictiva por excelencia, se caracteriza por una doble ofensiva: del capital, por un lado, intentando grandes operaciones en un espacio a la vez más valioso y más ocupado (renovaciones centrales, remodelaciones con cambio social en la periferia, reconstrucción de zonas residenciales en áreas de negocios, realización y privatización de infraestructuras y servicios, etcétera); y de la población por el otro, que a la vez que se opone a estos proyectos expresa las necesidades sociales más numerosas y más insatisfechas que antes desde posiciones más fuertes. En este sentido los aparatos de Estado son objeto de agudos conflictos político-ideológicos en su interior y aunque acostumbran a estar más dominados por el capital, no solamente deben de tener en cuenta sus funciones generales sino que también, sobre todo en los Estados formalmente democráticos, pueden estar en parte en manos de representantes de sectores sociales populares (tanto órganos políticos como técnicos).⁶

Cuando se llega a esta situación es cuando puede hablarse de "crisis del modelo de desarrollo". Esta crisis no viene dada porque el anterior modelo haya creado problemas insolubles, o grandes dificultades a la continuación del crecimiento (por ejemplo la baja fiscalidad y la deficiente estructura de la inversión pública, las deseconomías de aglomeración, la incapacidad por parte del sistema productivo para proporcionar las viviendas o servicios indispensables para reproducir la fuerza de trabajo), sino porque los aparatos de Estado del capitalismo monopolista no pueden dar a estos problemas la solución capitalista, debido principalmente a la fuerza político-social que se expresa a través de las movilizaciones sociales ciudadanas, de las luchas sindicales, de la presencia política de la izquierda en el nivel local, fuerza de base popular que repercute en el interior mismo de los aparatos de Estado, bien porque el personal técnico administrativo puede situarse en posiciones de interés público contra la lógica social del capitalismo privado (o de Estado incluso), bien porque las fuerzas populares conquistan la dirección de ciertas instituciones (por ejemplo la administración local).⁷

⁶ Los casos de Italia y España nos sirven de pauta. Sobre Italia ver la excelente síntesis del I.N.U. "Lo sfruttamento capitalistico del territorio" (1972), "Lo Spremo edilizio", de F. Indovina y otros (Mersilio, 1973). La colección de Archivo Urbano e regionali i de la Città-Clase y numerosos artículos en las revistas *Politica y economia* y *Crítica marxista* (sobre todo desde 1969). Sobre España ver J. Borja: "Los movimientos urbanos en España" (en *Los movimientos sociales... op. cit.*). M. Tarragó: *Política urbana y luchas sociales* (Avance, 1976) y M. José Olevé y otros: *La política de vivienda en España (Documentos de análisis urbano, núm. 3, 1976)*.

⁷ Ver "L'urbanisme di parte, ruolo sociale del tecnico". Selección de textos del *The Journal of the American Institute of Planners* (Franco Angeli, 1973).

"¿Planificación para los planificadores o para el cambio social?" de E. Browney G. Jaisse (*Eure* núm. 3 y en M. Castells y otros: *Imperialismo y urbanización en América Latina*, G. Gili, 1973). Sobre la hegemonía de las ideologías progresistas entre los profesionales e intelectuales del urbanismo pueden citarse como fenómenos significativos: la influencia reciente del marxismo en los medios profesionales y

Podemos decir que los movimientos reivindicativos urbanos bajo una apariencia inofensiva —se reivindican alquileres más bajos o más proporcionados a los ingresos, se resisten a las expropiaciones, se piden más escuelas o más espacios verdes, etcétera, tienden en última instancia a poner en crisis el modelo de desarrollo. Y esto es válido no solamente para sociedades desequilibradas y con amplias zonas y sectores subdesarrollados (Italia, España) sino también para las sociedades más desarrolladas (países del Mercado Común, Estados Unidos). En estos países no solamente hemos asistido en los últimos años a la rebelión urbana de los grupos sociales sobreexplotados (ghetos, trabajadores inmigrados) sino a la multiplicación de las demandas y conflictos urbanos de todo tipo, desde la oposición a operaciones de remodelación que significarían expropiaciones y también destrucción de tramas urbanas significativas, hasta la lucha, en las unidades residenciales periféricas, por mayores niveles de prestaciones.⁸

Puede decirse que casi todas las sociedades industriales capitalistas tienen modelos de desarrollo con altos costos sociales, necesidades de consumo colectivo que tienden, si no hay una fuerte presión popular, a no ser cubiertas (o cada vez peor); políticas urbanas, de vivienda y de servicios, que acentúan las desigualdades, etcétera. Muchas veces se habla de los movimientos reivindicativos urbanos como movimientos que por naturaleza tienden a la “integración”, al “reformismo”, que hacen el juego al sistema incluso.⁹ Todo movimiento reivindicativo —laboral, educativo, cultural o urbano— se inscribe en la lógica de desarrollo existente (es su fuerza) y tiende a mejorar las condiciones inmediatas de acceso a los bienes y servicios producidos, con el carácter y la forma de producción que tienen. Digamos que todo movimiento reivindicativo tiene una dimensión reformista, incluso integradora. Pero al mismo tiempo todo movimiento reivindicativo que plantee la satisfacción de necesidades sociales y que organice amplios sectores de la población, se opone a la lógica del desarrollo urbano capitalista que comporta una creciente y desigual insatisfacción de las necesidades colectivas y, como veremos más adelante, una progresiva dependencia y debilidad de las instituciones representativas locales.

académicos anglosajones y de Europa del norte; la orientación de la mayoría de investigaciones en Francia subvencionadas por el Estado (DCRSR); y la capacidad de atracción en Italia de la administración local y regional de izquierda sobre los mejores profesionales así como la producción del importante Instituto de Urbanismo (Venecia).

⁸ Ver los trabajos de M. Castells sobre Estados Unidos y Francia en los que se cita abundante documentación y bibliografía.

⁹ Ver los trabajos de los “institucionalistas” franceses, por ejemplo, “Les équipements et le pouvoir” (*Recherches*, 1973). Estas tesis son curiosamente asumidas por Marc Guillaume, economista del Partido Socialista Francés (*Le capital et son double*, París, 1974).

3 Movimientos urbanos y crisis

Aunque no se trata de un conflicto urbano, quiero mencionar la situación específica que se plantea en períodos de crisis económica, como el que vivimos en los últimos años. Una de las consecuencias inmediatas de la crisis es la disminución del consumo social, el empeoramiento de las condiciones de vida urbana, el empequeñecimiento del salario indirecto. Las causas inmediatas de este fenómeno son fáciles de descubrir. Disminuye la inversión pública en vivienda social y prestaciones. Se aumentan los impuestos —sobre todo indirectos (véase el caso de la gasolina)— o se traspasan los gastos de prestaciones sociales a la administración local (que a su vez debe aumentar los impuestos). Aumentan también los precios de los servicios públicos o de bienes de consumo colectivo que a pesar de serlo funcionan con lógica privada monopolista (agua-gas-electricidad, teléfonos, la gasolina citada, transportes colectivos). Puede ocurrir también que se enfrenten los precios o disminuyan las prestaciones en enseñanza, seguridad social, asistencia sanitaria. La razón o la causa profunda de todo ello hay que buscarla en la reorientación del gasto público hacia inversiones más directamente ligadas al beneficio capitalista, en la disminución de la presión fiscal sobre el capital, en la canalización del ahorro hacia actividades que produzcan beneficios inmediatos, en la “rentabilización” capitalista de los servicios colectivos para compensar la disminución de rentabilidad en otros sectores. Esto es posible porque entre los aparatos de Estado con funciones socioeconómicas y los intereses privados importantes se han trazado multitud de hilos, en general discretos, que intentan hacer pagar la crisis a los sectores medio y bajo a través del subconsumo; y también porque la conflictividad en el consumo social no está suficientemente desarrollada e institucionalizada como para hacer visible que la población pueda oponer una resistencia eficaz en todos los niveles en que actúan el aparato de Estado y el capital privado.¹⁰

La combinación en estas situaciones de un empeoramiento de las condiciones de vida urbanas, al mismo tiempo que se mantiene el crecimiento de las necesidades sociales, con una falta de mecanismos institucionales para regular las contradicciones y establecer compromisos (carácter depen-

¹⁰ En los países europeos capitalistas, la izquierda ha elaborado programas alternativos basados en las nacionalizaciones (en Francia y en Inglaterra), en la prioridad al desarrollo de las prestaciones colectivas y en una política productivista y de pleno empleo. Ver por ejemplo, el ya citado “Della crisi alle crisi”; el programa del Labour Party de 1973 y su revisión del 76: la producción de los especialistas del PCF (“Pour l’urbanisme...” *Nouvelle Critique*, 1974; *La crise, économie et politique*, 1975, en especial la contribución de E. Preteceille sobre la “ville invivable”); y el debate en *Rinascita* (septiembre, octubre y noviembre de 1975), sobre un programa a medio plazo. Sobre la confusión en que se debate el pensamiento conservador ilustrado al respecto ver la reciente producción francesa, por ejemplo el libro de P. Granet o el artículo de M. Roncayolo en el dossier “L’homme, la ville et la démocratie”, *Le monde diplomatique*, junio de 1976.

diente de la administración local y debilidad relativa de las organizaciones representativas ciudadanas o de barrio, que son los principales interlocutores en presencia) pero al mismo tiempo un alto nivel de organización y movilizaciones populares en distintos niveles de la realidad sociopolítica (partidos, sindicatos, movimientos de la enseñanza, asociaciones de usuarios o de barrio, organizaciones informales, etcétera) da lugar a que se cree una situación conflictiva muy compleja. Si comparamos la conflictividad entre los sectores patronal, sindical, gubernamental y de partidos que ha surgido en los países occidentales sobre las cuestiones de salarios, puestos de trabajo, precios y política económica anticrisis (inflación, importaciones, créditos, seguros sociales) con la conflictividad que se ha dado en barrios y ciudades veremos cómo esta última es mucho más difícil de reducir a unos enfrentamientos claros y a unos ejes simples. Desde las ocupaciones de vivienda, las huelgas de alquileres o las campañas de "desobediencia civil" (tarifas eléctricas, transportes colectivos) hasta la aprobación de presupuestos deficitarios por parte de consejos municipales con mayoría de izquierda. Desde las movilizaciones sociales que exigían escuelas u hospitales hasta las campañas contra los aumentos de precios o las luchas de los parados. Desde el aumento de la violencia urbana o de los fenómenos de desorganización social (delincuencia juvenil, prostitución, robos, etcétera) hasta el auge de las ideologías ecológicas y antiurbanas, hemos asistido en los últimos años a explosiones sociales en todos los sentidos cuyos resultados urbanos o políticos inmediatos son muy difíciles de apreciar.

Quisiera solamente destacar algunos aspectos: la dificultad que tienen estos movimientos para asegurar tanto la continuidad de la acción como la representatividad del grupo (s) social (es) interesado. Aparecen casi siempre como movimientos esporádicos y locales cuando expresan necesidades continuadas y generales. A esta dificultad se añade otra: la de encontrar interlocutores válidos enfrente y mecanismos que regulen la negociación de los conflictos. Todo ello conduce a una apariencia radical y a una eficacia política reducida.

Estrechamente ligados a lo anterior aparecen dos fenómenos diferentes pero con causas comunes: la importancia de las *formas de acción* "desviadas", síntomas del conflicto pero no encaminadas al planteamiento y menos aun a la resolución de las reivindicaciones latentes (la violencia o la delincuencia urbanas, desde las bandas juveniles hasta los robos masivos en los supermercados) y las acciones que podemos comprender bajo los términos de "desobediencia civil" y de "acción directa" (negativa a pagar los aumentos de precios pero continuando la utilización del bien o servicio, ocupación por la fuerza de viviendas o locales para convertirlos en servicios colectivos, etcétera).¹¹

¹¹ Sobre la acción directa y la desobediencia civil ver J. Borja "Por un voluntarismo realista", COAM, Madrid, 1975, Semana de la construcción, y "La crisis económica y la desobediencia civil" (*tele-expres*, enero, 1975).

Este último tipo de acciones (de eficacia muy diversa según las coyunturas concretas y la legitimidad social de las organizaciones responsables) son más expresiones de una situación que instrumentos de cambio, por el carácter minoritario y discontinuo con que se producen.

Pero plantean en cambio una cuestión clave: la urgencia de cambiar una legalidad y unas instituciones que ya no corresponden a las relaciones sociales establecidas, a las necesidades colectivas ni al carácter de las fuerzas en presencia. De la misma forma que el movimiento obrero ha conseguido (no en todos los países) derecho de huelga, a hacer asambleas, a sindicarse, a participar (a veces) en la organización del trabajo y en la gestión de la empresa, etcétera, los movimientos urbanos (que en ciertos aspectos se encuentran en una fase similar al período en que los trabajadores rompían máquinas o sabotaban la producción, o esperaban el momento de establecerse por su cuenta o formar una cooperativa) deben conseguir un nuevo marco institucional que cree nuevas obligaciones "urbanas" para el Estado y el capital privado, que descentralice la administración y permita establecer mecanismos de participación y control y que legalice las formas de organización y de acción urbanas susceptibles de encuadrar amplios sectores sociales.

Segunda parte: movimientos urbanos y democratización del Estado

I. Del mito de la "comunidad urbana" al del "doble poder"

Con lo último que he dicho llegamos a lo que nos parece la dimensión más propiamente política de los movimientos urbanos. En la tradición clásica de la sociología y de la ciencia política la cuestión se reducía a la participación de los ciudadanos en el "poder local", fuera individualmente o bien a través de partidos o asociaciones.¹² Luego el auge de los movimientos urbanos extrainstitucionales, ideológicamente radicales, practicantes de la acción directa, ha dado lugar a que se teorizara sobre unos movimientos urbanos de naturaleza revolucionaria, organizadores de las masas populares "fuera del Estado" para dirigir el asalto contra éste y creadores de nuevos valores y nuevas instituciones (la democracia directa, la justicia

¹² Una síntesis de los estudios sobre el poder local en U.S.A. y en Italia se encuentra en "Potere e politica locale in Italia" de R. Catanzaro (*Quaderni di Sociologia*, 1975).

popular, la colectivización de la vida cotidiana, la autogestión, el igualitarismo...). Siguiendo esta línea podemos encontrar estudios en que se analizan con detalle movimientos de ocupaciones de viviendas en las que intervienen algunos centenares de familias y unas decenas de activistas políticos y se olvidan totalmente de que en el mismo país puede haber centenares de consejos municipales de izquierda y decenas de miles de personas encuadradas en asociaciones o sindicatos de vecinos o arrendatarios (eso sí, "reformistas"). En Italia, en Portugal, incluso en Francia, Alemania u Holanda, surgen teóricos o grupos políticos que convierten a la ciudad actual en escenario del combate final entre capitalismo y socialismo y ven apuntar el doble poder en todas las esquinas de los barrios en los que brota una protesta social.¹³ En situaciones más serias, en América Latina, especialmente en el Chile de la Unidad Popular, la teorización "revolucionaria" de los movimientos urbanos ha llevado a equívocos trágicos como el confundir el Santiago de 1973 con el Petrogrado de 1917, los "campamentos" de una población que ante todo intentaba sobrevivir (al lado de un Estado que aparecía más tolerante) con los soviets de obreros y soldados de un Estado descompuesto. El "doble poder" es una situación excepcional que puede darse cuando el Estado ha sido ya desarticulado y se desmorona y la sociedad tiene un bajo nivel de institucionalización y de integración sociales. No es el inicio del proceso revolucionario sino el final. Jugar al "doble poder", inventarse formas de "organización autónoma de las masas" para enfrentarse al "Estado burgués", concebir la sociedad como dos frentes con sus aparatos e ideologías propios, sólo conduce a teorizar una realidad social mítica desde un punto de vista científico y a crear situaciones límite que acaban en tragedia desde un punto de vista político. En el mejor de los casos, es decir, cuando se dan verdaderas movilizaciones sociales amplias, extrainstitucionales, se produce un enfrentamiento entre movimientos sociales e instituciones políticas (administrativas, militares, judiciales, etcétera) en el que los movimientos disponen de menos fuerza siempre y de menos consenso casi siempre. La concepción dicotómica del cambio social (Estado-capital-opinión pública conservadora por un lado, organizaciones revolucionarias-movilizaciones sociales populares y clases dominadas conquistadas en el proceso revolucionario por el otro) y su corolario: enfrentamiento entre movimientos sociales e instituciones (que se convierte en enfrentamiento de organizaciones vanguardistas apoyadas en luchas sociales exasperadas contra aparatos represivos de Estado) desemboca en el aniquilamiento político de los más

¹³ Ver la producción de los grupos de tipo espontaneísta, sobre las ocupaciones de vivienda y la "conquista de la ciudad" (*Secours Rouge* en Francia, *Lotta Continua* en Italia), a principios de los años 70. Una posición más elaborada y rigurosa se encuentra en la documentación sociológico-política de izquierda en Italia, por ejemplo *Inchiesta* (ver en especial los núms. 11 y 17).

débiles, y, si la movilización social y la organización política de los sectores populares ha sido masiva, en un sistema político de dictadura terrorista.

Sin querer exagerar la importancia de la "teorización revolucionaria" de los movimientos urbanos pienso que es necesario insistir en el error que hay en el punto de partida: la confusión entre el carácter primitivo ideológicamente, débil socialmente, en germen políticamente, poco organizado y menos reconocido institucionalmente, de unos movimientos sociales y su pretendido valor revolucionario intrínseco que sólo existiría si fueran capaces de conquistar el Estado y la hegemonía social en el inmediato y totalmente. Este error de partida¹⁴ lleva a una lectura distorsionada de los movimientos urbanos y a unos planteamientos políticos de un subjetivismo extremado mucho más próximos al anarquismo que al marxismo.

II *Movimientos urbanos y democratización política*

No se trata, constatado el idealismo que preside los análisis de este tipo, de volver a los estudios tradicionales del poder local y de las comunidades urbanas. Pensamos que hay que situar la dimensión política de los movimientos populares urbanos en el proceso más general, en las sociedades capitalistas desarrolladas o en vías de serlo, de irrupción de las masas organizadas dentro del Estado. Estos movimientos sociales, como los sindicales, como los culturales, como los relativos a los derechos civiles, etcétera, forman parte de un proceso que los partidos políticos de masas y de izquierda tendrían que sintetizar y dirigir, al menos en parte, proceso que debería transformar democráticamente el Estado y modificar los mecanismos socio-económicos con vistas a disminuir las desigualdades y los despilfarros sociales. La dimensión política de los movimientos urbanos responde a dos tendencias estrechamente ligadas: a) la oposición al progresivo autoritarismo y burocratización del Estado del período de capitalismo monopolista y la presencia política de las masas populares y de las ideas socialistas en las instituciones y en los centros de poder económico y cultural (a través de los partidos de izquierda, los sindicatos, las organizaciones de masas de todo tipo, el desarrollo de las fuerzas de la cultura, etcétera...) y b) los movimientos opuestos al tipo de desarrollo económico-social y cultural del capitalismo monopolista de Estado que comporta crecientes desigualdades e insatisfacciones, que significa enormes despilfarros sociales, que atomiza la vida ciudadana, etcétera. Es decir, los movimientos urbanos se inscriben de lleno en el combate social que puede reunir a la gran mayoría de la

¹⁴ Es interesante señalar la evolución autocrítica que se manifiesta en la introducción del estudio de M. Castells, F. Godard, E. Charty y D. Mehl: *Sociologie des mouvements sociaux urbains* (París, 1974).

población, por la democratización del Estado y por un nuevo modelo de desarrollo.¹⁵

No es posible situar, ni teórica ni políticamente, los movimientos urbanos "fuera del Estado". No son un germen de un nuevo Estado sino un agente de transformación del existente. Estamos hablando de países de sólida institucionalidad, como los de Europa occidental y quizás alguno de América Latina.

¿Cuál puede ser la aportación de los movimientos urbanos al proceso de democratización política? En primer lugar cumplen una función que ya hemos señalado de "agregación social", de constructores o reconstructores de un tejido colectivo. Pero limitarnos a esta función sería reducir la participación política a una dimensión expresiva. En segundo lugar tienen una función formativa e instrumental, para continuar utilizando la terminología de Pizzorno,¹⁶ es decir organizan a un conjunto de sectores sociales que pueden llegar a ser la mayoría de la población ciudadana, y convierten la multiplicidad de necesidades y aspiraciones resentidas por estos grupos en objetivos por los que luchar frente a otros grupos sociales y frente a la lógica actuante en las instituciones públicas. De esta forma "obligan" a las instituciones a modificarse, a crear interlocutores, a asumir nuevas problemáticas, a negociar y a hacer concesiones. En tercer lugar, los movimientos urbanos, una vez alcanzado cierto consenso social, amplitud y continuidad, se convierten en un medio para asegurar la participación y el control en las instituciones locales, para cambiar la legalidad, para abrir un proceso de reforma del Estado.

III *Movimientos urbanos y reforma del Estado*¹⁷

La *reforma del Estado* tiene, por lo que a la relación instituciones locales-movimientos urbanos se refiere, estos aspectos principales: a) conseguir que se supere la concepción de la *administración local como organismo que*

¹⁵ Ver sobre todo la producción italiana. Sobre la "Reforma del Estado": *La Reforma dello Stato* (Terracini, Perna, Barca, etcétera. Riuniti, 1969). *Riforma dello Stato, regioni, etne locale* (colectivo, Riuniti, 1973) y los escritos de Ingrao (en *Rinascita*, 1973, núm. 47 y 1975, núm. 18, especialmente). Sobre un nuevo modelo de desarrollo ver los textos reunidos en el libro *I comunisti e la economia italiana*, 1974 (L. Barca y otros. De Donato, 1975) así como la citada "Dalla crisi alla crisi" y el debate sobre "Un programa a medio plazo"; así como los artículos e intervenciones políticas de G. Napolitano del último año (1975-76), en *L'Unité y Rinascita*.

¹⁶ A. Pizzorno: "I Partiti, elite i base in una città meridionale. (G. Sivini, *Partiti e partizipazione politica in Italia*. Milano, 1969.)

¹⁷ La reflexión sobre la reforma del Estado a nivel local está mucho más avanzada en Italia que en el resto de Europa. Basta comparar el programa del Labour Party o de la Union de la Gauche en Francia, o las *proposiciones* contenidas en el

se dedica exclusivamente a la "política social", que dispensa servicios a la población; servicios en muchos casos, entendidos casi como beneficencia. Se trata de definir, por una parte, un conjunto de derechos sociales y de valores respecto al consumo colectivo y a la igualdad ciudadana que "obliguen" a la administración, puesto que su satisfacción es indispensable, en un cierto nivel de desarrollo, para asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo. Se trata de ampliar la consideración de los servicios colectivos como "improductivos" y hacer aceptar que la productividad social no equivale a la rentabilidad de un bien o servicio distribuido como mercancía. Se trata también de dotar a las instituciones locales de nuevas competencias tanto por lo que respecta a una mayor autonomía, como por la posibilidad de participar en la toma de decisiones globales (leyes, planeamiento, etcétera...). Los órganos locales deben encargarse de la gestión económico-social, cultural, de servicios públicos, etcétera... en su territorio. Deben de tener los recursos financieros propios necesarios. Y deben por último, asumir competencias respecto al aparato productivo y los mecanismos económicos en general, puesto que si no pueden intervenir en la cuestión del empleo, los créditos, los precios, etcétera... son muy vulnerables.

b) No basta con que la administración local tenga mayores competencias y autonomía, debe ser además más *democrática*. En el Estado capitalista moderno se da una tendencia a la centralización y a la concentración del poder real en organismos no representativos (aparatos de Estado "separados", de tipo "técnico" o "represivo", más próximos a los centros de poder económico-social). Se trata de dar supremacía a las instituciones elegidas, representativas, lo cual quiere decir también modificar su estructura y funcionamiento para que puedan cumplir las complejas tareas socio-económicas, culturales, administrativas, que corresponden al Estado moderno, mucho más amplias que las que competían a la administración local del Estado liberal, que se limitaba a simples tareas de "policía urbana" y de asistencia social. Además a la tendencia a la concentración y centralización del "poder local" hay que responder con la *descentralización* y la *participación* popular a través de los sindicatos, organismos de vecinos y de usuarios, etcétera... La lucha por la descentralización y la participación o el control de la gestión municipal es seguramente el aspecto más

excelente libro que resume las posiciones del PCF (*Remain la ville*, de J. Giard y F. Ascher, E. Sociales, 1975) con la extensa documentación italiana sobre el tema. La línea católico-progresista está representada por ejemplo por S. Mariani, *Stato e democrazia* (M B, 1974). La posición socialista por *Decentramento urbano e democrazia* de U. Drogone y otros (Feltrinelli, 1975). La reflexión del PCI se encuentra en *Sviluppo delle autonomie e riforme dello Stato* (Riuniti, 1975). La posición sindical sobre la base de su experiencia de los consejos de zona está resumida en *I consigli di Zona* (COINES, 1974). Son de especial interés las publicaciones de la Lega por la autonomía e i poteri locale (*II Comune democratico* y *II potere locale*) así como la revista *Democrazia e Diritto* (próxima al PCI).

nuevo y más relevante de los movimientos urbanos en los países capitalistas avanzados.

c) Por último se trata de “socializar” la *gestión urbana*, es decir de desarrollar formas de autogestión en los servicios públicos, en las prestaciones, en las empresas municipales. La autogestión municipal puede darse en muchas formas y con sistemas muy distintos según los sectores. Por ejemplo es relativamente sencillo que muchas prestaciones colectivas, en el nivel de barrio, como los de tipo cultural, deportivo o recreativo, estén bajo la gestión de la población del barrio, a través de las organizaciones de masas representativas o de organismos elegidos por todo el barrio creados *ad hoc*. Es más complicado el caso de los transportes y de centros sanitarios y escuelas de la zona, en cuya gestión se debe articular la participación de la población usuaria y de los trabajadores del centro con su adscripción a unas funciones más generales a través de organismos superiores de Estado (regionales o centrales). En otros sectores el crear formas de autogestión cubre aspectos diversos: por ejemplo, en el de la vivienda puede significar desde desarrollar cooperativas ligadas al sector público hasta la gestión de los grupos residenciales —viviendas y servicios— por sus usuarios. Respecto a la autogestión municipal quiero insistir, para terminar, que su desarrollo va muy ligado al desarrollo de la “socialización” política y económica global.

IV *Movimientos urbanos y alianzas sociopolíticas*

Los movimientos urbanos son agentes a través de los cuales se desarrollan estos procesos de democratización política. Pero no son los únicos ni actúan aisladamente. La democracia municipal no se consigue sola. Los movimientos “municipalistas”, que ya fracasaron en los inicios del Estado absoluto, cuánto más no serían utópicos hoy en que la vida económica, cultural y política responde a mecanismos y fuerzas de ámbito mucho más global. La lucha por la democracia municipal solamente es viable si se inscribe en procesos sociales más amplios, si es asumida por fuerzas que actúan a nivel estatal, si en ella participan clases sociales que han superado el nivel de conciencia localista. Es decir, la lucha por la democracia municipal no es una cuestión de competencia exclusiva de los movimientos urbanos y de las organizaciones populares sino que es uno de los ejes de acción de los partidos de izquierda, de los sindicatos obreros, de las clases populares en su conjunto. Y aún más que esto: sobre la base de la democracia local pueden formarse alianzas sociales y políticas de signo progresivo mucho más amplias y que modifican la relación de fuerzas en su conjunto. Señalemos tres cosas: a) a medida que se desarrolla el capitalismo monopolista de Estado la pequeña y mediana burguesía se encuentra

a la vez con más problemas socioeconómicos y más falta de instrumentos políticos. Puede refugiarse en ciertos aparatos locales con actitudes reaccionarias, sobre todo si la izquierda y el movimiento obrero son débiles. Pero los órganos locales y sobre todo los de tipo regional pueden ser un instrumento para emprender una política antimonopolista, sabiendo muy bien que sólo podrá empezarse y en aspectos muy parciales (por ejemplo, política de crédito y fiscal, financiamiento de servicios públicos, etcétera); b) las alianzas pueden englobar incluso a sectores del gran capital interesados en combatir las rentas más parasitarias, en disminuir las crecientes deseconomías de aglomeración, en apoyar una política de prestaciones colectivas que disminuya las tensiones sociales. Ejemplos de estos dos casos se han dado en Italia del norte en los últimos cinco años; c) los aparatos de Estado de carácter local son mucho más receptivos a las demandas populares: son más accesibles, están más próximos a la población, incluso los de tipo técnico o que no tienen carácter representativo; sus funciones socioeconómicas se dirigen en gran parte a asegurar el consumo colectivo y generan por lo tanto una ideología de bienestar público y de igualdad social; al haberse multiplicado sus actividades ha aumentado mucho el personal (hospitales, urbanismo, enseñanza, instituciones culturales, abastecimientos, vivienda, etcétera), que ya no puede ser el personal formado a través del "funcionariado", con sus privilegios y categorías; además hay que tener en cuenta que una parte del desarrollo de las funciones, organismos y personal es una respuesta a la presión ejercida por los mismos movimientos urbanos y por lo tanto está marcada por la ideología y los objetivos de éstos. La transformación de los aparatos de Estado y la asunción por el personal de éstos de las propuestas democráticas —tanto políticas como sociales— puede darse con más facilidad en la administración local y regional que en la central.

V *El Estado no es un aparato especial*

A través de esta exposición aparece una concepción de Estado muy diferente de aquella instrumentalista que da casi siempre la izquierda y que la derecha no sólo comparte sino que intenta ejercer. Nos referimos a la tendencia simplificadora que reduce el Estado a un conjunto de aparatos especiales dotados de mayor o menor autonomía. La derecha liberal añadirá que no solamente son autónomos sino que todos los ciudadanos pueden acceder a ellos a través de las elecciones. La derecha autoritaria acentuará su separación teórica de la sociedad, los sacralizará para hacerlos inaccesibles. La izquierda es simplista cuando acepta esta concepción y sólo le

añade que estos aparatos están íntimamente ligados, o son dependientes, de las oligarquías económicas y sociales.¹⁸

Pero el Estado es mucho más que algunos entes representados por importantes que sean (cuerpos de alta administración, fuerzas armadas, etcétera); es el conjunto de instituciones y reglas que ordena toda la vida social. Ningún grupo oligárquico por poderoso que sea puede apropiarse de todo el Estado en las sociedades desarrolladas. Ninguna clase social, por sólida que sea su dominación económico-social, controla totalmente el Estado moderno. En todos los niveles de la sociedad y del Estado se da una lucha por la hegemonía entre clases, fuerzas políticas e ideológicas. Ni la conservación de las estructuras sociales y de poder está nunca plenamente asegurada ni los procesos de cambio se realizan a través de una acción, del "gran día", a través de lo cual las fuerzas revolucionarias conquistan el viejo Estado, lo destruyen y construyen uno nuevo. Los procesos de cambio se realizan a lo largo de todo un período histórico, a través del cual las instituciones se transforman, la hegemonía de las ideas y los valores se modifica, las estructuras socio-económicas se reforman. Este período histórico tiene momentos "fuertes" relativamente breves, y momentos más largos, de estabilización de los cambios, e incluso de marcha atrás.¹⁹ Las acciones emprendidas en los "momentos fuertes", a menos que se dé una crisis tan total del Estado como en la revolución francesa o rusa (situación muy excepcional) deben de permitir no solamente la realización de algunas transformaciones básicas sino también el reforzamiento de las fuerzas políticas y sociales avanzadas, el aumento de su capacidad de hegemonía y de consenso, para llegar en buena posición al período de estabilización. Si el proceso de cambio no se entiende así, si se multiplican las acciones revolucionarias al mismo tiempo que se resquebraja la unidad y el consenso, si las fuerzas de cambio pretenden jugárselo todo por el todo, la "revolución" se convierte en "contrarrevolución" (caso de algunas revoluciones frustradas en Europa después de 1917, además del caso de Chile), o, si las fuerzas conservadoras son demasiado débiles, una parte de la izquierda, aliada a la derecha, aísla a la parte revolucionaria de la izquierda (República de Weimar, Portugal).

¹⁸ Un ejemplo de visión esquemática de izquierda es el texto de C. Mingasson sobre "la Institución municipal y la lucha de clases" (traducido en el libro *Urbanismo y práctica política*, H. Capel y otros, Libros de la Frontera, 1974). La herencia dogmática comunista (recuerden el documento de la Internacional Comunista de 1930 sobre "la Política Municipal de los comunistas") ha sido en gran parte superada en Europa occidental, sobre todo en Italia (ver citas 15 y 17).

¹⁹ Ver artículo sobre Portugal de R. Boix y J. Borja, *op. cit.*

VI *Un nuevo modelo de desarrollo y una nueva cultura*

Y volvemos así a la temática del principio. La lucha por la democracia local ni nace espontáneamente ni su eficacia política se limita a aumentar el nivel de participación o el peso político de las fuerzas de izquierda. La democratización política local es un resultado de unos movimientos sociales generados por la defensa de las condiciones de vida y la lucha por la satisfacción de las necesidades históricas de reproducción de la fuerza de trabajo a través del consumo social, así como por la aspiración de tejer lazos de vida colectiva y de sentirse ciudadano activo y participante de la comunidad en que se vive. Los efectos propiamente políticos de estos movimientos, desarrollo de organizaciones populares ciudadanas y democratización de la administración local, deben convertirse en medios para responder a las demandas originales. No se trata de conformarse contemplando el crecimiento de las organizaciones de masas y de la presencia política en las instituciones. Esto respondería a una estrategia política que, fuera para prepararse para el asalto en el "gran día", fuera para conquistar la mayoría electoral, concebiría al Estado como aparato externo, como criticábamos anteriormente. Además sería una forma de instrumentalización de las masas populares al no dar respuesta a las motivaciones sociales base de su movilización. Limitarse a ocupar posiciones en las instituciones es dar la razón a los que la conciben como simple democracia formal. Pero las fuerzas políticas progresistas apoyadas en movimientos sociales avanzados no ocupan las instituciones democráticas simplemente sino que las utilizan y transforman para combatir la desigualdad. Cuando los derechos se ejercen para modificar las relaciones socio-económicas y los valores dejan de ser derechos formales.

Aquí aparece una contradicción importante. Los mecanismos económicos actúan, a un nivel muy superior al local. La hegemonía ideológica, con más variaciones, tampoco se decide en los niveles de barrio o de ciudad. Los movimientos urbanos, por mayoritarios que sean, y las instituciones locales, por ocupadas por la izquierda que estén ¿pueden transformar la economía y los valores culturales? Una respuesta apresurada de tipo negativo conduce entonces a hacer "buena gestión social" y esperar. Es decir, en función de los recursos limitados y de la legalidad e ideología dominante, procurar satisfacer lo mejor posible las demandas de consumo colectivo de la población, esperando que las condiciones políticas generales cambien.

Pero la transición de un modelo de desarrollo a otro y de un sistema ideológico dominante (leyes y valores sociales) a otro no tiene por qué esperar a que se haya dado el cambio político global porque entonces no se dará nunca. Para que la izquierda triunfe políticamente, conquiste la mayoría, tiene que haber conseguido antes la hegemonía en múltiples niveles de la vida socio-económica, cultural y también, evidentemente, del Estado.

La sociedad civil evoluciona y madura para el socialismo antes de que las fuerzas políticas socialistas dominen el Estado. Desde posiciones políticas subalternas (como la administración local) como desde la oposición, desde posiciones de poder social como las alcanzadas por los sindicatos y organizaciones de masas, desde las posiciones políticas e ideológicas dentro de los aparatos de Estado, desde las posiciones conquistadas en los medios culturales, la izquierda no solamente defiende condiciones de vida y valores de las clases populares sino que puede realizar una labor constructiva que desarrolle lo que se han llamado "elementos de socialismo".²⁰ Nos referiremos primero a la *cuestión socio-económica*. La conquista de las instituciones locales por parte de las fuerzas progresistas apoyadas en los movimientos sociales (sindicales, urbanos, etcétera) comporta inmediatamente la necesidad de responder a las demandas sociales. Hemos dicho que no basta la "buena gestión": los recursos no son suficientes y aún así, al no tocar los mecanismos, los problemas se reproducen. Un paso adelante es la utilización de los órganos locales para dar una batalla política contra el Estado. Por ejemplo: el votar presupuestos deficitarios (en Francia) o el hacer una batalla común de los municipios DC e izquierda (en Italia) para obtener más recursos financieros y competencias. Es seguramente un camino indiscutible, pero tampoco basta. Hay que dar respuestas inmediatas a los problemas socio-económicos: déficits, paro, desorganización social, abastecimientos, etcétera. Estas respuestas hay que darlas combinando el carácter concreto de los problemas y de los recursos con las líneas de un proyecto de desarrollo socio-económico distinto. Por ejemplo, la cuestión del paro. El poder local puede limitarse a emplear los subsidios y asistencias, crear artificialmente puestos de trabajo en el sector público, desarrollar una política de obras públicas, relanzar —por todos los medios— empresas que creen puestos de trabajo, o bien emprender —si puede— una política destinada a reestructurar los sectores productivos (a través de los créditos, de la municipalización, de la creación de empresas municipales o regionales, etcétera). Analizando las propuestas de la izquierda europea deducimos que una política avanzada que sea el embrión de un nuevo modelo de desarrollo tiene, entre otras, estas características: A) Política de relanzamiento de las actividades productivas a través del desarrollo del sector público y de créditos al sector privado (acompañados de condiciones sobre precios y puestos de trabajo y de controles administrativos y sindica-

²⁰ Expresión de E. Berlinguer (PCI).

²¹ Ver por ejemplo *Rinascita*, núm. 21: "Le nuove forme de democrazia" y sobre todo los programas municipales de izquierda aprobados después de la victoria de junio de 1975 (por ejemplo, Torino, Bologna, Napoli, Milano, Firenze, etcétera) así como la ley sobre el "decentramiento urbano (1976). La preocupación sobre el papel de la administración local en la democratización del Estado también se encuentra en Francia. Ver por ejemplo, las revistas *Communes d'Aujourd'hui*" (PCF) y *Communes et régions de France* (PFS), así como el debate actual en la izquierda sobre las elecciones municipales de 1977.

les). B) Política de pleno empleo y de desarrollo del consumo a través sobre todo de la realización de obras de infraestructura y de servicios colectivos. La prioridad a la vivienda, a prestaciones hospitalarias, escolares y culturales, transportes, es no solamente una prioridad social y política, sino también económica, como forma de orientar la inversión pública y de canalizar el ahorro privado hacia sectores de alta productividad social. C) Esta política implica una fiscalidad progresiva y un control de los precios de los productos más necesarios y usuales para que no se disparen las tendencias inflacionistas, así como un control en la distribución para impedir los fenómenos de acaparamiento y mercado negro, lo cual quiere decir desarrollar múltiples formas de participación y control popular.

Es decir, tres características básicas de un nuevo modelo de desarrollo son: el progresivo protagonismo del sector público (no necesariamente el sector estatizado central) y el control (a través del Estado y de los sindicatos) del sector privado; política de desarrollo en la que se da una gran importancia a los sectores destinados a satisfacer el consumo social; movilización y control populares sobre las instituciones y sobre los agentes económicos. Estos criterios los podemos aplicar tanto a una política respecto al paro como de vivienda.

La finalidad de aplicar una política socio-económica en función de un nuevo modelo de desarrollo es doble. En primer lugar permite dar una coherencia a las medidas puntuales y sectoriales y al mismo tiempo tocar los mecanismos constantes de los problemas. En segundo lugar forma parte de la batalla político-ideológica para imponer un nuevo tipo de desarrollo, apoyado en fuerzas sociales y políticas distintas (en parte) a la sociedad. No olvidemos que, a nivel local y regional, sólo se puede empezar, en el mejor de los casos.

Y también debemos referirnos precisamente a la cuestión ideológica y cultural. La política local de la izquierda debe responder a nuevos valores y debe modificar viejas normas. ¿Cuáles, cómo?

Parece evidente que la izquierda no puede gobernar como la derecha. Para hacer algo diferente hay que hacerlo también de un modo diferente ("el nuevo modo de gobernar" fue el slogan del PCI en las elecciones locales italianas de 1975). Sobre la base de las experiencias de Chile, Portugal e Italia podemos avanzar algunas características de un nuevo modo de gobernar en el nivel local.

A) La relación administración-población se realiza sobre nuevas bases. Porque la administración se presenta no sólomente como representante de una mayoría electoral sino de una mayoría movilizada y porque necesita de esta movilización para aplicar un programa de reformas. Porque pretende aplicar una política en interés y con la participación de la gran mayoría o casi totalidad de los ciudadanos: no se trata tanto de darles garantías frente al Estado sino medios de participación en él. Para ello los medios son diversos. La transparencia de las funciones de la adminis-

tración y la elaboración democrática de sus oposiciones es indispensable. Por ejemplo, véanse algunas experiencias de elaboración y aprobación de presupuestos municipales (por ejemplo Torino, 1975). Ya hemos hablado antes de la descentralización y de la participación así como del desarrollo de formas de autogestión municipal. Aquí las experiencias y formas son múltiples: constitución de órganos municipales descentralizados y de organismos mixtos (administración-organizaciones ciudadanas, por ejemplo), institucionalizaciones en forma de referéndum popular y de leyes de iniciativa popular; realización de encuestas y asambleas para elaborar los programas; intervención de los ciudadanos en la realización de funciones político-administrativas, como el control de los abastecimientos y precios, fiscalidad, gestión de servicios públicos, etcétera.

B) El funcionamiento interno de la administración también debe cambiar hacia una mayor democratización y eficacia en el servicio del interés colectivo. Una cuestión clave es la de la moralidad no solamente en el sentido más usual de eliminar la corrupción y la poca dedicación al trabajo (una medida elemental es la de la total dedicación de los cargos públicos directivos y de los funcionarios) sino también en el sentido de desarrollar una nueva moralidad pública. Una administración progresista debe ser no solamente democrática sino también eficaz. Eficaz respecto al bien colectivo. Hay que valorizar no solamente el cumplimiento formal de la función sino también y sobre todo sus resultados respecto al gasto público, a la necesidad colectiva que cubre, etcétera. Una administración democrática y eficaz implica a la vez que un control exterior de la población (ver punto anterior) un funcionamiento interno abierto y responsable que elimine al máximo el autoritarismo y la burocratización y que no haga de las categorías un sistema de privilegios.

C) Por último, la batalla cultural e ideológica significa que la administración y los movimientos sociales avanzados difunden en toda la sociedad, como explicación de sus objetivos, los valores democráticos e igualitarios que presiden su actuación, los valores solidarios y colectivos. Hay que defender una concepción igualitaria de la ciudad y de la sociedad, una visión solidaria y colectiva de la vida cotidiana, el valor prioritario de la participación social, del gobierno de las amplas mayorías, de la resolución pacífica de los conflictos. Hay que aplicar una política de control mucho más a través de la presión social que de la coacción administrativa, una política que combata la desorganización social y la delincuencia mucho más a través de la reestructuración de la vida colectiva que de la represión simple.

Los medios para dar esta batalla cultural no son simples. No se trata de pretender imponer nuevos valores creando nuevas instituciones y reglas que no tengan el consenso mayoritario (por ejemplo experiencias de "justicia popular"), lo que sería imposible en el nivel local o regional solamente y porque además provoca reacciones contrarias muy grandes. Los nuevos valores se imponen combinando una aplicación práctica, cuando

ello es posible, con la propaganda, la educación, la realización de experiencias-tipo, etcétera. En todo caso, para que puedan imponerse cambios formales en la legalidad y en las instituciones se ha de haber ganado la batalla en el terreno social e ideológico. Podemos concluir diciendo que la política en sentido estricto es la mediación entre lo socio-cultural y lo jurídico institucional, para conservarlo o para transformarlo.

Conclusión: la cuestión urbana y la vía democrática al socialismo (resumen)

La cuestión urbana se presta a hacer socialismo utópico. Una forma elemental de hacerlo es construir "bastiones" socialistas en barrios y ciudades, lo que en la versión "reformista" consiste en hacer gestión local socializante esperando que cunda el ejemplo y se generalice, en la versión "revolucionaria" estos bastiones son concebidos como embriones del doble poder, preparados para el asalto final.

Una forma más elaborada de socialismo utópico es la de plantear una alternativa socioeconómica y sobre todo de "civilización". Un modelo de sociedad diferente.²² La elaboración del modelo ya contiene fuertes dosis de idealismo: se parte de una concepción esencialista de las necesidades humanas y se acaba configurando un proyecto de sociedad socialista a través de la construcción intelectual. Cuando se propone un nuevo modelo de desarrollo, como hacíamos antes, no se está construyendo un proyecto ideal para el futuro sino articulando —en un sistema coherente— las demandas y los objetivos mayoritarios que aparecen a través de las contradicciones del desarrollo económico-social y de los conflictos sociales y políticos. El nuevo modelo de civilización no responde a necesidades humanas ni a especulaciones intelectuales sino a proyectos sociopolíticos arraigados en los movimientos de masas y en las organizaciones populares. No se trata además de construir el proyecto de la sociedad futura sino de articular los objetivos para avanzar en una dirección más democrática, más racional y más igualitaria. Las características de la sociedad futura no se pueden precisar, los objetivos intermedios para llegar a ella, sí. La finalidad de un proyecto político, socioeconómico y cultural avanzado, no es

²² Si la tradición comunista exige superar la concepción de los órganos locales como "bastiones" frente al "Estado", una línea de pensamiento de tipo "socialista modernista" tiende a la construcción de modelos intelectuales alternativos. Modelos de civilización. Esta concepción está presente sobre todo en la izquierda anglosajona y nordeuropea y en el P.S. francés.

el presentar una imagen de sociedad ideal de futuro sino de servir como línea política para un vasto movimiento social hoy. Es decir un proyecto de "ciudad socialista" debe basarse en las necesidades y objetivos expresados por la lucha de clases y debe configurar una estrategia política de transformaciones políticas y socioeconómicas. Sus bases son materiales no especulativas, sus objetivos son políticos no ideológicos (en sentido peyorativo).

Hechas estas consideraciones veamos, para terminar, cómo se plantea la cuestión urbana en la perspectiva del socialismo. La preocupación de la izquierda respecto a la cuestión municipal no se reduce a una cuestión táctica de tipo democrático, a un eslabón particularmente débil del Estado autoritario, a una ocasión para la movilización de masas en la ciudad y los barrios. Es más bien un aspecto importante, otra dimensión, que está también en la base de la mayoría de los movimientos urbanos, la defensa de las condiciones de vida, la lucha por la vivienda y los servicios, las reivindicaciones relativas al salario indirecto.

Las reivindicaciones urbanas y las movilizaciones que aspiran a la democratización de la vida municipal (la democracia local) forman parte hoy del gran movimiento popular por el cambio y la democracia, por una mayor igualdad social a partir de reformas socioeconómicas urgentes (fiscal, régimen del suelo, rol del sector público en la vivienda y los equipamientos, planeamiento urbano y regional, etcétera). Pero estas reivindicaciones y movilizaciones, como las que se dan en el movimiento sindical, en la enseñanza, en la sanidad, en el campo, van más allá, apuntan hacia soluciones socialistas, o en todo caso, pueden ir en esta dirección.

La vía democrática al socialismo no es un vía simplemente electoral: una victoria en unas elecciones permite tener mayorías parlamentarias y de gobierno y aplicar una serie de medidas transformadoras. Para conseguir estas mayorías y para poder aplicar estas medidas es necesario que las fuerzas políticas y sociales socialistas, avanzadas, hayan ido conquistando posiciones de hegemonía en todos los niveles de la sociedad, es necesario que en la sociedad se desarrollen "elementos de socialismo" en la vida económica, cultural, administrativa, es decir en los mecanismos de acumulación y consumo, de cohesión ideológica y en los valores sociales, en la gestión y en la participación en el sistema político.

Si la izquierda pensara que el socialismo se reducirá a "tomar el poder" en un momento dado, fuera por la vía insurreccional o electoral, la cuestión municipal se reduciría a su utilización con el fin de aumentar las fuerzas para el "Día D". Durante mucho tiempo, la práctica comunista se limitó a una buena gestión social para ganar la confianza de las masas populares y utilizar estas posiciones para hacer propaganda del socialismo. La práctica socialdemócrata ha sido más limitada aún: solamente ha utilizado la gestión municipal para hacer electoralismo indiscriminado y aumentar los nexos de la organización política local con el aparato político estatal y los intereses económicos.

Pero hoy la sociedad civil, en los países capitalistas, ha ido madurando para el socialismo y exige cada vez más soluciones de este tipo. También en el nivel municipal y urbano, el planeamiento, la municipalización del suelo o de los servicios, la vivienda como servicio social, la descentralización y la participación ciudadana, etcétera, se han convertido en objetivos cada vez más mayoritarios. Aquí se dibuja una nueva concepción de lo que son las soluciones socialistas. El socialismo ya no es un sinónimo de "estatización", no se reduce a la política de expropiación del gran capital y de planificación central e integral que un partido o un conjunto de partidos aplican desde el poder. Los elementos de socialismo que se apuntan en la sociedad civil y en el interior mismo del Estado en los marcos local y regional, en el poder contractual y político de los sindicatos, en las fuerzas de los partidos de izquierda, con los que se debe negociar aunque no gobiernen, en la hegemonía de las ideas democráticas avanzadas, igualitarias, en la cultura y en los aparatos del Estado, señalan otras dimensiones del socialismo, mucho más complejas que las versiones esquemáticas y primitivas del socialismo estatista. Un socialismo descentralizado y pluralista, una propiedad pública y semipública que puede revestir diversas formas (estatal, nacional o regional, cooperativas, empresas sindicales, municipales y de otro tipo), una organización social múltiple y libre como corresponde a una sociedad compleja y desarrollada, una cultura y una ideología ni oficiales ni dependientes del Estado sino diversas y libres como las formas de vida social organizada que las producen y expresan. El socialismo democrático y descentralizado es lo contrario de un socialismo estatista y burocrático.

En el Estado democrático la lucha por el socialismo se libera en el interior de todas las instituciones del Estado. Es una lucha de posiciones y no de movimientos (Gramsci), define todo un período histórico y no es la batalla de un día que se espera fortificado desde organizaciones e ideologías marginales a la vida social. Por esto en la concepción de la vía democrática al socialismo, la cuestión de las nacionalidades, de las autonomías regionales, de la democracia municipal, adquieren una especial relevancia. No se trata de reducirse a tareas de eficaz gestión social (desde el poder local) o a plantear reivindicaciones de viviendas y de servicios (desde la oposición), aunque esto sea indispensable. Tampoco, en el extremo opuesto, podemos pensar que el Estado socialista se construye paso a paso, empezando, por decirlo de alguna manera, por el barrio y la empresa y subiendo gradualmente. De lo que se trata es de entender la lucha por el poder local, en este caso, como un movimiento en el que se combina la presión social popular con el acceso a las instituciones municipales y desde aquí acelerar el doble proceso de transformaciones socioeconómicas y de reforma democrática del Estado en el marco de un movimiento más amplio destinado a conquistar la hegemonía, la mayoría, en la sociedad y en acceder a los centros de poder político en el Estado. El poder municipal es un punto de encuentro entre la sociedad civil y el Estado.

En este nivel se combinan reivindicaciones ligadas a las condiciones de vida con la organización de la gestión social. La vida cotidiana y la vida política se confunden en la vida ciudadana municipal. Las luchas sociales repercuten más directamente en el sistema político; los valores y las ideologías avanzadas pueden concretarse en las líneas de actuación inmediatas. Es un terreno comercialmente favorable a la conquista de la hegemonía por parte de las fuerzas populares y socialistas.

Porque nada nos parece más erróneo que suponer que por el hecho de que los movimientos urbanos y la gestión municipal no están en el centro ni de los mecanismos de acumulación capitalista ni de los aparatos de decisión política tienden inmediatamente a la integración reformista o a la protesta marginal. Si en la sociedad urbana se pudiera liquidar la lucha de clases, si el capitalismo monopolista pudiera llevar hasta sus últimas consecuencias su lógica de desarrollo, si el Estado centralista burocrático fuera la única dimensión política de las sociedades occidentales, seguramente sería así. Pero a estas tendencias se oponen otras:

a) La importancia que han adquirido el consumo colectivo y el salario indirecto en el capitalismo desarrollado y las formas de explotación indirecta que se dan en este nivel, con la correspondiente importancia de las luchas sociales urbanas.

b) El papel del Estado, y en este caso de la administración local, como gestor de esta explotación, la necesidad de tener en cuenta las presiones sociales y la contraindicación que representa el que fuerzas de carácter socialista conquisten la dirección de las instituciones locales. En los aparatos del Estado, en los órganos políticos locales, en la administración y en los organismos técnicos —por sus funciones cada vez más extensas y por la presión social mayoritaria— tienden a imponerse criterios de racionalidad y de planeamiento, de interés público colectivo, de justicia social, de descentralización.

c) Las contradicciones internas del capitalismo en su nivel territorial urbano. Encontraremos los intereses de la propiedad del suelo, de los grandes constructores (pero también del capital bancario e industrial que interviene en la especulación del suelo y en la construcción) que tienden a la apropiación de las plusvalías urbanas, a la sumisión de la ciudad a la lógica del beneficio inmediato (con los consiguientes déficit sociales), a disminuir al máximo la presión fiscal y por lo tanto los recursos públicos pero también se dan otras tendencias: necesidad de disminuir las rentas especulativas del suelo por parte del capital industrial y comercial, de atenuar las presiones sociales en el lugar de trabajo a través de una política de servicios públicos, de hacer más eficaz la actuación de la administración para evitar el progresivo colapso urbano.

d) La progresiva legitimidad mayoritaria que adquieren las soluciones de democracia político-social, de carácter socialista, no solamente entre las clases populares sino también entre clases medias, aparatos del Estado y

servicios públicos, medios técnicos y profesionales, así como medios culturales y de comunicación de masas, e incluso entre sectores del capitalismo. Estas soluciones no adquieren validez como resultado de un convencimiento intelectual sino como consecuencia de la lucha de clases, ya que si ésta no se diera en forma de luchas sociales, de denuncias respecto a la corrupción, de exigencias de planeamiento y participación, nada se opondría al desarrollo de la ciudad capitalista moderna con costos sociales, organización burocrática y acumulación especulativa crecientes. Las soluciones de urbanismo y gestión municipal que adquieren esta legitimidad (el control público del suelo y del derecho de edificación, una política de vivienda y servicios que sirva por igual a todos los ciudadanos, la democratización de la administración local, el desarrollo de la vida colectiva, etcétera) tienen el doble carácter de dar prioridad a los agentes públicos sobre los privados y de articular la gestión administrativa con la participación social. Es decir, se enfrentan tanto a la lógica del capitalismo monopolista, como a la del Estado burocrático.

La vía democrática al socialismo no es exclusivamente la vía de las "autonomías locales", como tampoco es la "sindical" ni la "parlamentaria". La vía democrática al socialismo significa la progresiva democratización del Estado y de la sociedad, y ésta puede darse cuando se cumplen tres condiciones básicas: a) Un nivel de desarrollo económico-social lo suficientemente elevado para que haya posibilitado la integración económica y cultural necesaria para que los conflictos sociales tengan márgenes de negociación y compromiso. b) Un nivel de institucionalidad suficiente para dar un marco democrático a los conflictos y permitir la expresión de todos los grupos sociales, fuerzas políticas y corrientes culturales. c) Un nivel alto de organización y de participación dentro de las instituciones del Estado de las clases populares y medias y de las fuerzas políticas y culturales de orientación socialista, tanto a través de partidos políticos como de sindicatos, movimientos ciudadanos y regionales, asociaciones culturales y sociales de todo tipo, etcétera.

Cuando se dan estas condiciones podemos decir que la sociedad civil está madura para el socialismo y que dentro del Estado es viable, y es la única viable, una estrategia política, democrática, hacia el socialismo.

Esta vía implica entonces el desarrollo de las autonomías locales, de la gestión municipal y de la organización regional democrática, en el sentido que hemos esbozado en este artículo; implica también el desarrollo del papel que desempeña el movimiento sindical, tanto respecto a la empresa y a los organismos municipales como respecto a la gestión social, y por último, su papel dentro de las Instituciones del Estado. También se requiere una transformación de las instituciones representativas, en el sentido de su extensión en cuanto a funciones y competencias de su apertura y transparencia respecto a la población, de su eficacia como instrumentos democráticos de dirección del Estado (no como en el actual capitalismo

monopolista de Estado en el que el poder real se escapa en gran parte de las instituciones representativas). En resumen, la vía democrática al socialismo requiere un *desarrollo y articulación de la democracia de base con la democracia representativa*, la primera como expresión genuina y cotidiana de la sociedad y la segunda como forma superior de organización del Estado. Aunque no exclusivamente, la relación dialéctica democracia de base-democracia representativa puede darse con una especial intensidad en los barrios, ciudades, comarcas y regiones. En la vía democrática al socialismo los movimientos urbanos y regionales se convierten en uno de los grandes protagonistas del cambio político.